

Imprimir

Este 7 de agosto se posesiona el gobierno liderado por Gustavo Petro y Francia Márquez, un gobierno popular y de transición, del que participaran bajo una agenda de transformaciones pendientes una amplia alianza de fuerzas políticas tradicionales que tienen la oportunidad de sintonizarse con una era de cambios y ampliación de esta precaria democracia, que ha demostrado que para ser una democracia de calidad y que soporte un Estado Social y de Derecho, debe transformarse en muchos sentidos, partiendo por reconocer y garantizar el protagonismo de la ciudadanía que no quiere seguir viviendo en un orden social de exclusiones, autoritarismos y violencias que aniquilan la vida.

Gustavo Petro hoy es presidente electo y ejercerá por los próximos cuatro años, liderando una acción de gobierno y sociedad, para hacer las tareas pendientes que no se han hecho por que implican superar privilegios antidemocráticos, que están a la base de este largo ciclo de violencias organizadas, Gustavo Petro ha ofertado que Colombia será una potencia mundial de la vida, nos ha propuesto cerrar todas las violencias organizadas para entrar a una era de paz.

Gustavo Petro, viene del primer acuerdo de paz contemporáneo firmado por el M-19 en marzo de 1990, desde allí al presente hemos logrado integrar a este orden de democracia precaria a un conjunto de organizaciones retadoras de este orden desde las guerrillas y a los defensores desde la acción paramilitar, siendo el acuerdo firmado con las FARC, como la mas grande y persistente de las organizaciones guerrilleras el último de los acuerdos y el que abre esta posibilidad de cambio, hay que reconocer que el paso dado por las FARC, nos ha sacado de la estrecha agenda de seguridad y mano dura en la que nada a la perfección la derecha dura del Uribismo, hoy relegada a pequeña minoría tanto en el Congreso como en la oposición, luego de ser el gran actor de la política colombiana en las últimas dos décadas.

La política de paz del gobierno liderado por Gustavo Petro y Francia Márquez, se sustenta en una agenda de transformaciones y un protagonismo popular abierto al dialogo y concertación con otros actores de poder, toda esta acción tiene como epicentro los territorios donde persisten las violencias organizadas, llámese ELN, el archipiélago de disidentes y rearmados de las FARC y esas estructuras mafiosas donde sobresale el Clan del Golfo, pero que van más

allá de esa organización, a este conjunto de organizaciones de diferente naturaleza en sus historias e intereses, pero que se mantienen en doscientos municipios donde no impera la constitución del 91 y debe trabajarse por su superación.

La política que ha formulado el Pacto Histórico para lograr una Paz Total, integra acción en el territorio por lograr que allí funcione de manera cabal el Estado, construir con la sociedad local en toda su pluralidad y diversidad, las políticas pertinentes para que el Estado haga sus tareas esenciales que hoy son suplantadas por los ilegales: seguridad, justicia y tributación, sin acción del Estado legítima y con respaldo de las sociedades locales, no será posible superar la acción de los ilegales.

Una política de paz, que sabe que hay que dar alternativas a las economías campesinas para salir de la coca que hoy persiste en los territorios donde las violencias organizadas son más intensas, sin alternativas para salir de la fracasada guerra contra las drogas, ninguna política de paz va a funcionar.

Una política de paz que sabe que se requieren negociaciones de paz con el ELN y asumir alternativas para los disidentes de las FARC, que no será volver a una mesa de negociaciones, luego de tener un acuerdo de paz tan detallado y con tanta potencialidad transformadora como el firmado en 2016 y que el gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez, se han comprometido a llevar hacia adelante, porque se comparte que en su desarrollo hay avances extraordinarios para avanzar en democracia y que es un compromiso que le hace bien a unas sociedades locales que están muy atrás en derechos, infraestructura y acción de Estado para que esos territorios estén integrados a una sociedad en paz.

La política de paz que viene desde el siete de agosto se sustenta en la constitución del 91, reconoce el protagonismo de las regiones, del mundo campesino, indígena y afro, que son los que más han sufrido estas barbaries, construyendo alternativas de desarrollo para vivir en dignidad y con derechos, el vivir sabroso que ha formulado la vicepresidenta Francia Márquez, desde su tradición ancestral, este será un gobierno para superar las violencias organizadas y abrir una era de paz para el conjunto de la sociedad colombiana.

Una política de paz, desde las transformaciones y la participación con sentido y norte, debe estar ligada a la política de seguridad, deben ir de la mano, reto enorme e ineludible.

Gustavo Petro ha dicho con todas las letras que su gobierno será un gobierno para la paz, para que Colombia sea una potencia mundial de vida, luego que hemos sido un país de violencias y barbaries persistentes, eso ofertó y tiene un mandato ciudadano para llevarlo adelante.

Luis Eduardo Celis

Foto tomada de: Semana.com